

De los Estados nacionales al Estado global: complejidad, violencia y guerra contra las drogas

Boris Salazar¹

Introducción

La interacción entre la guerra contra las drogas y la expansión explosiva de las organizaciones de narcotraficantes desnudó la debilidad estructural de los Estados nacionales comprometidos en esos procesos generando, a través de complejos procesos de transformación, cambios profundos en las instituciones legales nacionales y supranacionales, y conformando un nuevo orden que supera las fronteras nacionales, y cuestiona los conceptos tradicionales de soberanía, legitimidad y justicia.

El experimento colombiano ha sido el líder de esas transformaciones. El desafío de las organizaciones de traficantes, y la adopción de la guerra contra las drogas y el terrorismo como eje central de sus estrategias de desarrollo estatal, condujeron a la formación de instituciones supranacionales inéditas, con centro en los Estados Unidos, que dejaron a los delitos cometidos por los narcotraficantes por fuera de la jurisdicción del Estado colombiano, y globalizaron el enjuiciamiento y posterior protección de los criminales detenidos por narcotráfico y delitos conexos. En ese proceso, la justicia criminal colombiana desapareció y la impunidad que ha predominado en la historia nacional se volvió parte del orden legítimo.

Al mismo tiempo, la violencia letal no ha dejado de crecer en un subconjunto de ciudades colombianas, y el crimen organizado, en lugar de desaparecer, se ha expandido hacia toda la sociedad, en un proceso de mutación que ha superado las fronteras invisibles que antes lo mantenían como “asuntos entre bandidos”.

¹ Profesor Departamento de Economía, Universidad del Valle.

La adopción, por parte del gobierno de Calderón, de la guerra contra las drogas como su estrategia básica disparó la violencia letal y la impunidad en México, convergiendo con procesos interconectados en Honduras y El Salvador, llevando la violencia, la impunidad y el caos a niveles intratables por esas sociedades y sus Estados. Sin embargo, esos países aun no han adoptado las estrategias de control legal y los tratados internacionales que contribuyeron al desenlace alcanzado en Colombia.

Lo que inició como una guerra represiva más contra una actividad ilegal, con altos niveles de violencia y de penetración de los aparatos estatales, la política, la economía y la cultura de Colombia y otros países, terminó impulsando una profunda transformación tanto del negocio del narcotráfico, como de las funciones y jurisdicción de los Estados nacionales comprometidos en la estrategia. Desde el punto de vista del negocio, cambiaron su magnitud, su localización espacial, las estructuras de sus redes, su regulación interna, y su inserción en las sociedades de las que hace parte.

El sello y puesta en marcha de la alianza entre los Estados Unidos y el Estado colombiano por el control y la regulación violenta del narcotráfico desencadenó la mayor transformación ocurrida en esa actividad criminal, y el giro más importante en las relaciones entre Estados, y en el ejercicio de la justicia en el continente americano, en las últimas décadas.

Mientras que los delitos relacionados con el narcotráfico pasaron a ser investigados y juzgados por la justicia de los Estados Unidos, los homicidios cometidos en el desarrollo de esa actividad criminal terminaron dentro del territorio del crimen organizado, como “asuntos entre bandidos”, que no conciernen ni a la sociedad ni al Estado colombianos, legitimando la impunidad. Pero la expansión de la violencia letal hacia el conjunto de las sociedades afectadas por estos procesos ha dejado al descubierto la debilidad inherente a las concepciones que suponen un autocontrol del crimen organizado dentro de sus fronteras naturales.

En el mismo proceso la Policía Nacional de Colombia se especializó en la vigilancia, persecución y detención de los objetivos de alto valor, o jefes visibles de las organizaciones de narcotraficantes, dejando a un lado la seguridad ciudadana. Lo ha hecho con un éxito

notable, persiguiendo y deteniendo a la gran mayoría de los jefes reconocidos del narcotráfico colombiano. Al mismo tiempo, se generó en Colombia, y en otros países exportadores o intermediarios, una nueva oleada de violencia, inexplicable como el simple producto de las operaciones normales del narcotráfico o de su represión globalizada. ¿Cómo fue posible semejante transformación?

Propongo la siguiente hipótesis: dada la debilidad estructural del Estado colombiano, la interacción entre guerra contra las drogas y expansión del narcotráfico condujo a la *emergencia* de un nuevo sistema global de control del narcotráfico, administración de la justicia, protección de los ciudadanos, y regulación violenta del crimen organizado, y de las actividades ilegales transnacionales en general. En ese nuevo mundo, el Estado colombiano renunció a juzgar los crímenes relacionados con el narcotráfico, cedió su jurisdicción a la justicia de los Estados Unidos y dejó el control de los efectos violentos del crimen organizado en sus propias manos, reservando para sí la investigación, seguimiento y detención de los jefes del narcotráfico, la desarticulación de sus organizaciones y la interdicción de las exportaciones de cocaína.

Ese mismo proceso complejo está repitiéndose, con variaciones políticas importantes, en países como México, Honduras y El Salvador.

La pista más razonable para entender este fenómeno emergente está en el carácter interconectado y complejo de los sistemas sociales, económicos, políticos y estatales contemporáneos. En ellos, la interacción entre políticas tan potentes como la guerra contra las drogas, y fenómenos ilegales de la magnitud del narcotráfico, impulsan procesos de interacción y aprendizaje que conducen a la emergencia de eventos que difieren, en forma notable, de los objetivos originales, y producen instituciones y normas de regulación, tanto locales como globales, que no estaban en la mente de sus diseñadores.

En un mundo complejo, procesos en apariencia independientes son interconectados a través de mecanismos de difícil visibilidad. No es fácil ver, por ejemplo, la conexión entre las guerras civiles de El Salvador y Guatemala, la migración de veteranos de esas confrontaciones a los Estados Unidos, la formación bandas armadas, su deportación posterior y su actividad depredadora en las rutas de inmigrantes ilegales a los Estados

Estados Unidos, con la guerra contra las drogas y la creciente violencia en México, Honduras y El Salvador.

Sin embargo, es su interconexión recursiva lo que ha generado la violencia creciente, y apariencia inexplicable, en esos países. El llamado cartel de Los Zetas, la organización criminal más violenta, de México está conformada, en su núcleo duro, por antiguos militares, policías, guerrilleros y paramilitares de países como Guatemala y El Salvador. [Fernández & Ronquillo 2006; Garland 2009] En el camino de su desarrollo los antiguos combatientes mutaron en bandas criminales, que luego crecieron en los suburbios de inmigrantes de Los Ángeles y Long Island (Garland 2009), y que al ser deportados hacia sus países de origen, impusieron su reino de violencia y amenaza, en su camino de regreso.

1. La emergencia de un nuevo sistema

En la nueva división global del trabajo de control del narcotráfico, los efectos estructurales sobre la violencia, la justicia, la eficacia social y el crimen organizado, en las sociedades subordinadas y dominantes del nuevo sistema, son divergentes. Mientras en los Estados Unidos ha habido una disminución de la violencia imputable a las drogas y al narcotráfico, el crimen organizado ha reducido su influencia y el sistema de justicia es efectivo dentro de sus propios parámetros, en las sociedades subordinadas la violencia letal y el crimen organizado han crecido en un contexto de desorden creciente, tanto en el ejercicio de la violencia y de la extorsión, como en el alcance de los sistemas judiciales.

La nueva violencia afecta a individuos situados por fuera del crimen y sus lazos sociales y económicos, y compromete a un número creciente de organizaciones criminales que interactúan entre sí en forma violenta. Tanto la proliferación de organizaciones criminales, como la ausencia de un regulador dominante que imponga su fuerza y capacidad de amenaza sobre todas ellas, han contribuido al creciente estado de desorden observado. Al mismo tiempo los sistemas judiciales, y de investigación criminal, de los países afectados, o bien han desaparecido del todo, o languidecen en la trampa de su ineficiencia histórica.

El punto crucial es que el crimen organizado, en lugar de desaparecer, o disminuir su efecto sobre la sociedad, ha mutado hacia otras formas de organización y de acción, haciendo más difícil su tratamiento a través de la guerra total y de la persecución militar. Lo nuevo no está en los mayores niveles de violencia, sino en su carácter desordenado, con múltiples agentes agrupados tratando de extraer la máxima tributación posible, regular a través de la violencia los negocios legales e ilegales y neutralizar la acción de las autoridades.

Se trata de un fenómeno emergente, cuya ocurrencia no podía estar entre los objetivos de los diseñadores de la política de guerra contra las drogas. En aquellos países en los que la guerra las drogas ha estado más cerca de la victoria², la violencia del crimen organizado no ha dejado de crecer, en forma peligrosa y desordenada, generando una producción de orden y desorden desigual y contradictoria.

Mientras los Estados Unidos han alcanzado un mayor control sobre la oferta de drogas como la cocaína³, y sobre la demanda de algunas de ellas a través de su legalización en algunos estados, en los países exportadores, o intermediarios, el desorden y la violencia han seguido creciendo en forma acelerada, extendiéndose hacia toda la sociedad en la forma de una violencia extorsiva que golpea a los más pobres.⁴

Las trayectorias no han sido las mismas, pero la violencia y el desorden crecientes son similares. Mientras que en Colombia la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes ha caído en forma sistemática desde 2003, en varias ciudades de Colombia ha presentado una alta volatilidad, acelerando su crecimiento a partir de 2009, de la mano de una extorsión más extensa y de la proliferación desordenada de un mayor número de bandas y

² Como ha ocurrido, en efecto, en Colombia. La desarticulación de los sistemas integrados de producción, transporte y distribución de cocaína es un hecho incontrovertible, al igual que la captura y extradición de los jefes visibles de las organizaciones de narcotraficantes más grandes.

³ La transformación del narcotráfico dentro de los Estados Unidos es captada en forma brillante por la serie de televisión, *Breaking Bad*, en la que la droga de mayor venta, las metanfetaminas, es producida por un profesor de química de secundaria y un socio adicto que viven en Albuquerque, una ciudad situada en el estado de Nuevo México, cerca de la frontera con México. En la serie las organizaciones mexicanas terminan por fuera del negocio y la violencia nunca sube a los niveles conocidos al sur de la frontera.

⁴ Este fenómeno es observable incluso en situaciones de proximidad geográfica. Las fronteras nacionales y los distintos Estados que están de lado y lado cuentan en forma decisiva: A unos pocos kilómetros de Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo, está su contrapartida estadounidense, Laredo: limpia, pacífica y ordenada, sugiriendo que ni el desorden ni la violencia se extienden por pura contigüidad. [Bowden 2010, Grillo 2011]

organizaciones criminales, en México, Honduras, Venezuela y El Salvador, la violencia letal se ha disparado en forma catastrófica y los sistemas de justicia han sido sobrepasados sin remedio.

Países como Honduras y El Salvador, sin fuertes tradiciones de narcotráfico, terminaron en una pesadilla de violencia y anomía, producto de su localización geográfica, y de la repatriación de miles de jóvenes emigrantes a los Estados Unidos, convertidos en pandilleros organizados en su paso por ese país. Países sin aparatos de justicia efectivos sólo pueden ser espectadores de fenómenos que no alcanzan a entender y que no son consecuencia de sus propias acciones. En lugar de eliminar al crimen organizado y reducir sus efectos violentos, el nuevo sistema global de control del narcotráfico indujo su mutación convirtiéndolo en un mayor productor de violencia en contextos de desorden creciente.

Es una violencia que no puede ser explicada en puros términos causales. No hay causas discernibles y externas a la violencia misma que explicarían su emergencia y reproducción. Charles Bowden, en su extraordinario libro sobre la atroz violencia de Ciudad Juárez, sugería que una vez la violencia ha encontrado un medio y unos mecanismos para reproducirse sin fin, termina siendo un flujo físico siempre presente, como la luz solar:

Quiero explicar la violencia como si fuera una llanta pinchada y estuviera buscando un clavo en la superficie. ¿Pero qué tal si la violencia no es una falla, sino más bien una flor emergiendo de la maleza en el suelo de un bosque? Las familias, las cruces sobre la pared, los uniformes de la policía, las señales en las calles que aconsejan velocidades seguras, todas estas cosas son los clavos en una llanta hace largo tiempo muerta y aplastada, los cánticos de una religión extinguida. Los cholos de mirada fría, vidas cortas, y con ganas de meter una bala en la cabeza son la función. Las drogas que empolvan la vida de todo el mundo son la vía. El monstruo con cabeza de hidra que buscamos, la criatura que asesina por toda la ciudad, es como la luz del sol, de hecho, y esta nueva luz cae por igual sobre todos y cada uno. (Bowden 2010, 116)

La elección que hace Bowden de metáforas físicas para representar la expansión sin fin de la violencia no es un simple recurso literario. Es una necesidad impuesta por la mutación de la violencia restringida del crimen organizado en la violencia sin restricciones aparentes producida por la interacción entre narcotráfico, Estado y la guerra contra las drogas. Mientras la violencia atribuible al crimen organizado tiende a permanecer dentro de

las fronteras impuestas por los negocios ilegales, la violencia mutante se extiende más allá de las fronteras tradicionales del crimen y permea a toda la sociedad.

Al hacerlo se convierte en un problema político. Lo que está en juego ahora es el poder y la jurisdicción de los Estados nacionales, sustituidos por un Estado global, dirigido por los Estados Unidos, sus agencias de control y su aparato de justicia. Como lo plantea el mismo Bowden (2010, 114) para el caso de Ciudad Juárez –pero válido también para Colombia y otros países— un índice del papel creciente de los Estados en el despliegue de violencia es la impunidad de los asesinatos cometidos en estado de guerra total contra el narcotráfico: ningún detenido, ninguna investigación, ninguna sentencia.

2. Mutaciones

La guerra contra las drogas no siempre fue como la conocemos hoy. Iniciada por Richard Nixon en 1968, no buscaba ni el control del narcotráfico ni la lucha contra el crimen organizado ni la destrucción de las grandes organizaciones de narcotraficantes. Sus objetivos eran más locales y universales, al mismo tiempo: pretendía detener el uso de las drogas entre los jóvenes estadounidenses y dejar sin combustible la revolución cultural que crecía amenazadora en Occidente. En ese momento, Colombia no figuraba ni como amenaza ni como aliado potencial.

Pero todo cambió en forma brusca a finales de los años 70 y principios de los 80. Delincuentes colombianos, con espíritu empresarial, y facilidad para apretar el gatillo⁵, decidieron entrar en el negocio de la exportación de marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos. La combinación del uso de la violencia letal como medio de regulación de los negocios con una evidente audacia empresarial no causó, en principio, ninguna sorpresa en Colombia, pero sí llamó la atención de los expertos de las agencias de control de los Estados Unidos.

⁵ La capacidad de los delincuentes colombianos para contrabandear y vender drogas y productos ilegales no nació en esas fechas. Tanto en Medellín, como en Cali, Pereira y Barranquilla había antecedentes de experiencias exitosas en el contrabando y en el tráfico de sustancias prohibidas. Antecedentes que iban ligados a una larga práctica de violencia letal, bien anclada en el pasado. [Salazar 2001, Álvarez 2013, Baquero 2012]

En la leyenda tejida después, el momento revelador de la amenaza colombiana fue la matanza de Dadeland Mall, en Miami, ocurrida en 1979. Como en las mejores películas de bandidos, Paco Sepúlveda, gatillero de Griselda Blanco, asesinó a un narco mediano y a su escolta y destruyó a plena luz del día una tienda de licores, dejando para la posteridad una camioneta armada para la guerra, con chalecos anti-bala, escotillas para disparar y parabrisas unidireccional. [Álvarez 2013, 47-8; Baquero 2012]

Las agencias estadounidenses trataron la nueva amenaza cómo sabían hacerlo: vigilaron, infiltraron, siguieron, detuvieron, aniquilaron (cuando fue requerido) y juzgaron a los peligrosos artífices de la violencia y del narcotráfico que actuaban dentro de los Estados Unidos, pero traficaban desde Colombia, usando producción que venía de Perú, Bolivia. No podían prever dos elementos que resultarían fundamentales para lo que siguió: la decisión y la capacidad del Estado colombiano para combatir a la nueva amenaza global que emergía de sus fronteras y amenazaba con expandirse al mundo.

Lo que habrían de descubrir las agencias de los Estados Unidos unos años después fue que el Estado colombiano no estaba en capacidad de enfrentar a la doble amenaza de la infinita liquidez y la violencia letal de los narcotraficantes nacionales —lo que más tarde se conocería como el dilema “plata o plomo”. Nadie —ni el Estado, ni los expertos estadounidenses, ni los propios narcotraficantes— estaban preparados para el juego que habrían de jugar de ahora en adelante.

Los narcos pensaban que su negocio ilegal sería como los demás negocios ilegales que siempre habían prosperado en Colombia, y logrado su legitimación posterior, sólo que mucho más rentable. Ni siquiera Pablo Escobar, el más radical y anarquista de todos, tenía entre sus objetivos la destrucción del Estado, o su debilitamiento deliberado hasta llevarlo al colapso. Imaginaba un mundo con mucha liquidez adicional, riquezas sin límite, residencia en los barrios más exclusivos, acceso al poder político y un patronazgo social basado en la asistencia a los más pobres. En las clases dominantes de la época sólo veía un obstáculo banal a sus planes para sustituirlas muy rápido como los máximos generadores de riqueza.

2.1 El Estado desnudo

Ni el más desquiciado de sus delirios, Escobar habría podido vislumbrar el poder de amenaza que disfrutaría, ni las fuerzas que llegaría a desatar en su guerra contra el Estado colombiano y contra los Estados Unidos, y mucho menos los nuevos arreglos institucionales que habrían de surgir después de su muerte, de la destrucción de las grandes organizaciones de narcotraficantes (incluidas las de sus grandes enemigos), y del fin del reino del narcotráfico tal como lo él lo conociera.

En su ascenso irresistible Escobar se encontró de pronto con el Estado colombiano y descubrió que estaba desnudo bajo sus ropas legales y que era tan frágil como los jueces, los policías, los militares, los funcionarios, y los hombres de negocios que se rendían ante el poder intimidador del narcotráfico. O caían ante sus balas, si osaban resistir. Fue una revelación casual, no una búsqueda. Un encuentro no planeado con terribles consecuencias.

Escobar no siempre estuvo en guerra con el Estado. Una parte del establecimiento colombiano había decidido aceptar el éxito y los capitales de los prodigiosos empresarios delincuentes que ganaban unas cantidades de dinero impensables en cualquier otro negocio, legal o ilegal. Detrás de esa aceptación tácita estaba una larga tradición colombiana, que ligaba la producción y el comercio de bienes ilegales a las grandes oleadas de riqueza sobre las que se fundaba el poder de las clases dominantes. Era un discurso que compartían con Escobar y sus asesores y asociados.

Para Mark Bowden

A los narco-millonarios se los comparaba con aquellos magnates del petróleo que surgieron a fines del siglo XIX y principios del XX. Pablo mismo llegaría a aseverar con cierta razón (y tal vez con la voz de su cuñado dictándole al oído) que el patrimonio de las familias más influyentes se había construido sobre los cimientos del crimen: la trata de esclavos, el tabaco, el tráfico de quinina y tantas otras actividades de dudosa ética. La historia de Colombia rezumaba ejemplos, y del mismo modo que aquellas clases habían reordenado la lista de prioridades políticas a lo largo de la historia, los narcos también tenían sus propias exigencias: querían que el Estado legalizara su industria, y – teniendo en cuenta la cantidad de dinero que estaban dispuestos repartir y el boom de construcción que estaba experimentando Medellín— algunos intelectuales se tomaban en serio el hecho de que el comercio de la cocaína, representaba la salvación económica de las naciones andinas. (Bowden 2007, 56)

Pero Pablo aspiraba al poder político por la vía electoral y encontró, de pronto, que ese camino estaba lleno de obstáculos inesperados. Entre sus cálculos no estaba que hubiera

políticos tan extraños que pensaran detenerlo en sus aspiraciones con sólo hacer público su pasado criminal y la fuente de sus exorbitantes ingresos. Pero fue lo que ocurrió y Escoba respondió como lo había aprendido hacer en el mundo del crimen organizado: un irrespeto tan grande sólo podía ser respondido con la muerte del ofensor. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla abrió el camino para una guerra contra el Estado, en la que Escobar encontró que su enemigo no estaba en capacidad de enfrentar ni el terror ni la estrategia de guerra total de unos narcos convertidos en enemigos políticos.

El lazo que unía al Estado con Pablo Escobar alcanzó la intimidación propia de la ofensa personal y de la oposición amigo/enemigo. En el desarrollo de esa relación, Escobar encontró unos recursos que nunca habría imaginado: los miles de jóvenes dispuestos a matar policías y traidores ante una orden del gran patrón que no conocían, pero veneraban. El Estado, que estaba aprendiendo a lidiar con unas guerrillas urbanas en ascenso y había neutralizado a las antiguas guerrillas campesinas izquierdistas, encontró que no sabía cómo enfrentar a una organización criminal, cuya fuerza, estrategia y audacia superaba de lejos el entrenamiento, tecnología y voluntad de sus propias fuerzas policivas y militares.

Sólo los Estados Unidos tenían la capacidad tecnológica, la preparación y los recursos necesarios para enfrentar un desafío que estaba fuera del alcance del Estado colombiano. Pero su involucramiento no fue inmediato. La ley de extradición, por ejemplo, que apareció como la medida disuasiva que destruiría la voluntad de resistencia de los narcos, produjo el efecto opuesto sobre la voluntad de guerra de Escobar y sus seguidores. Al borrar la soberanía colombiana para juzgar a sus delincuentes, la extradición introdujo un tema nacionalista en la guerra de Escobar y colocó al Estado colombiano en la incómoda posición de haber revelado su absoluta incapacidad para juzgar a sus nacionales.

La ofensiva terrorista generalizada puesta en marcha por Escobar puso al Estado contra la pared, y llevó a la sociedad, a través de una Asamblea Constituyente, presionada por todas las organizaciones de narcotraficantes, a prohibir la extradición y tratar de encontrar algún tipo de sometimiento negociado a la justicia colombiana. Pero esa solución no funcionó y la estrategia de guerra global contra el narcotráfico quedó con el control de todo el espacio. Escobar cayó en esa guerra, superado por una alianza de fuerzas muy

variadas: fuerzas especiales de los Estados Unidos y de Colombia, traficantes enemigos, y paramilitares.

Con la eliminación de Escobar murieron también los intentos del Estado colombiano por controlar al narcotráfico y construir un aparato de justicia operativo. La trayectoria que unía al Estado colombiano con las organizaciones de narcotraficantes —a través de la cual se hicieron las negociaciones que terminaron con el sometimiento de Escobar a la justicia colombiana— desapareció para siempre, y fue sustituida por un conjunto de nuevas trayectorias que pusieron en marcha la negociación directa entre los Estados Unidos y los narcos.⁶

En la nueva división global del control del narcotráfico al Estado colombiano le correspondió un modesto papel logístico: seguir, perseguir, detener y enviar a los Estados Unidos a los principales jefes de las organizaciones de narcotraficantes acusados por la justicia de ese país. La Corte Suprema de Justicia quedó limitada a verificar que la acusación estaba en orden y pasarla al presidente para que aprobara la extradición de los detenidos. La idea de que el Estado colombiano podía investigar y adjudicar justicia en los delitos relacionados con el narcotráfico había sido borrada a golpes de guerra y de ineptitud.

Los narcos descubrieron que negociar con el Estado colombiano no pagaba, y que tampoco pagaba conducir una guerra total contra el Estado colombiano y el Estado más poderoso del mundo. Y los Estados Unidos descubrieron que el Estado colombiano no podía enfrentar la amenaza armada de narcotraficantes que actuaban como Estados primitivos y criminales. Siguiendo la lógica de la decisión racional, los Estados Unidos y los narcos decidieron negociar [Téllez & Lesmes 2006; Reyes 2006; López 2010, 2008] cara a cara, primero a través de intermediarios, y luego en forma directa. El célebre programa de rehabilitación o resocialización de narcotraficantes abrió el camino para la negociar la entrega de los narcos colombianos a las autoridades de los Estados Unidos.

⁶ Otros autores (Garay & Salcedo-Albarán 2012) hablan de la captura del Estado por parte de coaliciones de políticos, narcos y paramilitares. Aunque la idea capta procesos ocurrido durante ciertos periodos en ciertas regiones de Colombia y de México, no deja de ser un concepto estático, que desconoce las transformaciones sufridas por los Estados y la conversión en Estados primitivos del crimen organizado en ciertas regiones.

La negociación en sí misma era simple: los narcos delataban a sus antiguos socios y colegas a cambio de sentencias menores, dinero y protección. Sus consecuencias no lo eran en lo absoluto. La incertidumbre generada por la probable entrega a los Estados Unidos de antiguos socios, enemigos y subordinados puso en estado de alerta a todos los narcos y condujo a una explosión de violencia que borró del mapa a todos los asociados, familiares y amigos de los narcos que habían jugado como delatores en los Estados Unidos. En ciudades como Cali, y regiones como el norte del Valle del Cauca y Eje cafetero la violencia letal se multiplicó sobrepasando las fronteras “naturales” del crimen organizado y avanzando, en una primera etapa, hacia familiares y amigos, y luego, a través de otras trayectorias, hacia sectores cada vez más amplios de la sociedad. [Álvarez 2012; Salazar & Restrepo 2013, 2011; Salazar & Frasser 2013]

La expansión de la violencia letal hacia la sociedad en su conjunto ocurrió por diversas trayectorias. La efectividad de la política de negociación directa con los narcos no estaba tanto en la entrega misma de los jefes supremos del narcotráfico colombiano, sino en las consecuencias destructivas que tuvo sobre la operación del negocio, tanto en términos de la ruptura de redes, contactos y rutas, como en la destrucción de la confianza precaria que permitía la realización de negocios en las redes del narcotráfico. Por un lado, el asesinato de contactos y de intermediarios internacionales, lavadores de dinero, testaferros, abogados y contadores inhabilitó nodos claves de la operación global de las distintas organizaciones de narcos, por el otro, las delaciones y la infiltración dentro de las organizaciones de narcotraficantes condujeron a una caída de los ingresos por exportaciones de drogas ilegales y, en general, a una caída de la actividad en su conjunto.

Miles de escoltas, sicarios, especialistas en seguridad y en el ejercicio de la violencia se quedaron sin fuente de ingresos y de tributación. Organizados en bandas, pandillas, oficinas, y distintos tipos de agrupaciones hicieron lo único que sabían hacer —extorsionar, secuestrar, matar— sólo que ahora tenían que hacerlo por fuera del crimen organizado y del comercio ilegal: todos los negocios, ciudadanos, organizaciones sin protección de ningún tipo serían sus nuevas víctimas y fuentes de ingreso. La violencia letal y la extorsión habían

dejado de estar contenidas dentro de los límites invisibles del crimen organizado para extenderse por las partes más frágiles de la sociedad.⁷

3. El entorno ya no es entorno puro

No es casual que las trayectorias de entrada ocurran por las partes más frágiles de la sociedad. Aquellas que no tienen ni seguridad estatal ni privada, porque no pueden pagarla o porque el Estado no los reconoce como protegibles, son las que sucumben más rápido ante el avance del crimen organizado ávido de ingresos y en trance de asegurar su supervivencia. La trayectoria de los Zetas, que entran a México, extorsionando, secuestrando y matando a los inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos, es un buen ejemplo del nacimiento de una temible organización criminal a través de la expoliación de los más débiles: los que no están protegidos por ninguna autoridad. (Fernández & Ronquillo 2006) En el vacío generado por la falta de orden estatal y de eficacia social, las organizaciones criminales pueden crecer hasta que los poderes estatales, ya tarde, deben reconocer su poder.

Las relaciones entre el sistema recursivo conformado por el crimen organizado y guerra contra las drogas y su entorno han sido muy mal entendidas. La idea que compartían (incluyendo Pablo Escobar), y comparten, muchos es que hay una clara separación entre el sistema y su entorno, garantizando que la violencia letal propia del crimen organizado y de su persecución no pase al entorno, es decir, a las sociedades de las que es huésped.

Pero esas fronteras son frágiles y cambiantes. El entorno deja de ser un puro entorno, separado del sistema evolutivo en el que “todo ocurre”, y entra a hacer parte del sistema a través de la creación de trayectorias y de mecanismos de carácter recursivo que aseguran la expansión social de actividades y de instituciones ilegales. Es lo que hoy viven varias

⁷ Es una situación que no es exclusiva de Colombia. En México, la respuesta violenta de los llamados carteles a la guerra contra las drogas de Calderón ha llevado a algunos autores a hablar de *insurgencia narco*, en el sentido de la existencia de organizaciones que desafían militarmente al Estado y a sus fuerzas militares, atacándolas en forma masiva y letal. (Grillo 2011) La clave está en que el enemigo ya no son las otras organizaciones narcotraficantes rivales, sino el Estado mismo. Este proceso se profundizó en México con el uso del Ejército en la guerra contra las drogas. (Bowden 2010)

ciudades y regiones colombianas, y viven, en una etapa distinta de la guerra contra las drogas, sociedades como México, Honduras, y El Salvador.

Desde el punto de vista de la complejidad no es paradójico que el mejor arreglo posible para los Estados Unidos y los narcotraficantes colombianos haya terminado siendo el peor arreglo posible para vastos sectores de la sociedad colombiana y para regiones y ciudades enteras de México, Honduras y El Salvador. Desde el punto de vista de las dos partes involucradas los arreglos alcanzados garantizaban el ejercicio de la justicia para los Estados Unidos y la protección para las vidas de los narcos y de su familia inmediata.

Pero sus consecuencias fueron más allá de las partes involucradas. La interconexión sistémica entre agrupaciones criminales, sociedades desprotegidas, negocios legales y jóvenes sin oportunidades ha generado una violencia y un desorden social que no podían ser previstos por los diseñadores de políticas judiciales para ámbitos cerrados, en los que no hay relación entre el entorno y el crimen organizado. Lo que menos se entiende es la expansión mutante del crimen organizado y de la violencia letal en sociedades en las que tanto el Estado como la eficacia social son frágiles y no tienen la capacidad de cubrir todo el territorio. Y mucho menos se entienden los efectos nocivos de políticas en apariencia brillantes desde el punto de vista de la pura política judicial y de seguridad de los Estados Unidos.

La comprensión de las consecuencias políticas y sociales del narcotráfico y de la interacción entre Estados y narcotraficantes ha sido intentada desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia de las políticas estatales. Poco se ha considerado las relaciones básicas entre Estados, crimen organizado y sociedades. Estas últimas han terminado por fuera, no sólo de los análisis de los expertos, sino de las políticas estatales centradas en la destrucción de las organizaciones de narcotraficantes. La violencia y el desorden social crecientes en las sociedades afectadas aparecen como resultados del reacomodamiento del narcotráfico, o como fenómenos temporales sin ninguna relación con las nuevas políticas globales de control del narcotráfico. Allí está el desafío para las ciencias sociales y para las sociedades afectadas por el tratamiento global del crimen organizado y del narcotráfico.

4. A modo de conclusión

Sin duda, la guerra contra las drogas está siendo ganada en Colombia⁸. La desarticulación del negocio y sus organizaciones, y la eliminación de la amenaza narco contra la soberanía estatal así lo confirman. Pero la amenaza creciente contra la sociedad, surgida de esos nuevos arreglos, no ha sido estudiada, y mucho menos considerada con alguna seriedad en términos de políticas.

Los que creen en la lógica de la racionalidad individual podrán seguir evaluando la pertinencia de las políticas estatales y globales desde el punto de vista de las partes involucradas, dejando por fuera a las sociedades. Las evaluaciones optimistas de los resultados evidentes del plan Colombia, de la guerra contra las drogas en México, y en general del control del narcotráfico en los Estados Unidos y en la región seguirán repitiéndose con distintos grados de sofisticación.

Pero hay una tensión metodológica que no puede ser evitada. Cualquier intento de aplicación de la complejidad al estudio de los procesos de control del narcotráfico da una versión distinta de lo ocurrido. Reconoce, por supuesto, los resultados de las políticas basadas en la racionalidad individual y en la razón de Estado, pero señala las consecuencias imprevistas de su puesta en marcha. Supone la existencia de procesos complejos en los que las interacciones recursivas entre elementos en transformación afectan a toda la sociedad, al extenderse sobre ella a través de mecanismos no siempre evidentes para el ojo humano.

La sustitución de trayectorias directas Estado colombiano-narcotraficantes por trayectorias narcotraficantes-intermediarios-Estados Unidos, y luego narcotraficantes-Estados Unidos, eliminó al aparato judicial colombiano y dejó los crímenes de los narcos por fuera de su jurisdicción. En la nueva legalidad, los narcos se sienten más y mejor protegidos por la justicia y el aparato estatal de los Estados Unidos. Las nuevas trayectorias condujeron a explosiones de violencia letal que llevaron a la destrucción de buena parte de las organizaciones de narcotraficantes, y a la mutación de sus agrupaciones de regulación violenta en bandas mafiosas dedicadas a la extorsión sobre sus propias comunidades. Las

⁸ En el sentido estricto que le han dado tanto los Estados Unidos como el Estado colombiano, y que no tiene ninguna relación directa con el consumo de drogas o con sus efectos sobre la sociedad y los individuos.

fronteras ideales que separaban al crimen organizado de la sociedad en su conjunto quedaron destruidas, produciendo sociedades en las que la ausencia de justicia estatal y seguridad ciudadana, ha dejado a los más frágiles sin ninguna protección.

La globalización del control del narcotráfico resolvió un problema viejo y creó nuevos problemas que no pueden ser tratados desde el enfoque dominante. La interacción entre racionalidad individual y sistemas complejos muestra que sus efectos no pueden ser predichos desde los planes de las partes involucradas. Afectan a sociedades enteras, a través de trayectorias que hasta ahora no han sido estudiadas. El gran desafío para las sociedades inmersas en la guerra contra el narcotráfico, y afectadas por la violencia letal que la acompaña, es recuperar el control sobre sus comunidades, sabiendo que los Estados no pueden hacerlo.

Referencias

- Álvarez, J. M. 2013. *Balas por encargo: Vida y muerte de los sicarios en Colombia*. Bogotá: Rey Naranjo.
- Baquero, P. 2012. *El ABC de la mafia: Radiografía del cartel de Medellín*. Bogotá: Planeta.
- Bowden, C. 2010. *Murder city: Ciudad Juárez and the global economy's new killing fields*. New York: Nation Books.
- Bowden, M. 2007. *Matar a Pablo Escobar*. Barcelona: RBA.
- Garay, L.J. & E. Salcedo-Albarán. 2012. *Narcotráfico, corrupción y estados: cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*. Bogotá: Debate.
- Garland, S. 2009. *Gangs in the garden city: How immigration, segregation, and youth violence are changing America's suburbs*. New York: Nation Books.
- Grillo, I. 2011. *El Narco: Inside México's criminal insurgency*. New York: Bloomsbury Press.
- López, A. 2008. *El cartel de los sapos*. Bogotá: Planeta.
- Restrepo, L.M & B. Salazar. 2013. In the shadow of the state: The fall of Colombia's North Valley narco-trafficking network. Unpublished research manuscript.
- Reyes, G. 2007. *Nuestro hombre en la DEA: La historia de un fotógrafo que negoció la libertad de más de un centenar de narcos en Estados Unidos*. Bogotá: Planeta.
- Téllez, E. & J. Lesmes. 2006. *Pacto en la sombra: Los tratos secretos de Estados Unidos con el narcotráfico*. Bogotá: Planeta.
- Salazar, A. 2001. *La parábola de Pablo: Auge y caída de un gran capo del narcotráfico*. Bogotá: Planeta.
- Salazar, B. & C. Frasser. 2013. Menos cocaína, más violencia. Cidse, Observador Regional.
- Salazar, B. & L. M. Restrepo. 2011. Lethal Closeness: The evolution of a small-world drug-trafficking network, *Desafíos* 23: 197-221.